

# Defensa judicial

02 de agosto de 2021 al 06 de agosto 2021

Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico



## Licencia de tránsito puede volver a ser suspendida en caso de reincidencia en la infracción

La Sala de Consulta del Consejo de Estado resolvió varias preguntas al Ministerio de Transporte sobre el alcance, la procedencia y el procedimiento que debe seguirse a la hora de aplicar sanciones por reincidencias en la comisión de infracciones de tránsito.

El artículo 124 del Código Nacional de Tránsito señala que en caso de reincidencia se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva reincidencia se doblará la sanción. Además, se considera reincidencia haber cometido más de una falta a las normas de tránsito, en un periodo de seis meses.

Debido a las dudas que suscitaba para la entidad, entre otros aspectos, la aplicación de la norma en casos de nuevas reincidencias por la posible vulneración del principio del non bis in ídem, el ministerio formuló un conjunto de preguntas al respecto:

i) ¿Las autoridades de tránsito deben seguir un procedimiento para declarar la reincidencia y ordenar la suspensión de la licencia de conducción de que trata el artículo 124 del Código de Tránsito?

Respuesta del Consejo de Estado (CE): “Sí. Los organismos de tránsito deben seguir un procedimiento administrativo sancionatorio para declarar si se configura o no la reincidencia y, en consecuencia, si se ordena o no como sanción la suspensión de la licencia de conducción por un término de

seis meses, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley 769 del 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre”.

ii) ¿Qué procedimiento debe seguirse?  
¿Debe ser el procedimiento sancionatorio general del CPACA, el procedimiento contravencional del Código de Tránsito u otro procedimiento?

CE: Deberá seguirse el procedimiento establecido en los artículos 135 a 139 del Código de Tránsito y el artículo 8 de la Ley 1843 de 2017. Aclaró que este último se aplicaría “en el caso de la comisión de una contravención de tránsito detectada por el sistema de ayudas tecnológicas”. Lea también: Propietario de vehículo inmovilizado que no es infractor no debe pagar multa para retirarlo de los patios

iii) ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la reincidencia prevista en el artículo 124 del Código Nacional de Tránsito, infracción, agravante, u otro?

CE: “La naturaleza jurídica de la reincidencia prevista en el artículo 124 de la Ley 769 del 2002 es la de un agravante punitivo, conforme lo expresó la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-181 del 2016, por cuanto la ocurrencia de la reincidencia trae como consecuencia la imposición de una sanción más severa que la prevista para una primera infracción, cual es la suspensión de la licencia de conducción por un término de seis meses”.

iv) ¿Qué debe entenderse por “nueva reincidencia” a la que se refiere el artículo 124 del Código?

CE: “La nueva reincidencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, consiste en la comisión, por parte de un conductor reincidente, de una nueva infracción a las

# Defensa judicial



normas de tránsito en un periodo de seis (6) meses, contado a partir de la comisión de la segunda infracción (primera reincidencia).

En tal evento, el término de suspensión de la licencia de conducción (por doce meses) que se imponga como resultado de la segunda reincidencia se contabilizaría a partir del vencimiento del término de la suspensión anterior (seis meses), decretada en el acto administrativo que haya impuesto dicha sanción, por la primera reincidencia.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la existencia de reincidencias especiales, como son, entre otras, las reincidencias por conducir en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas, o por prestar el servicio público de transporte con vehículos particulares, sin justa causa, las cuales tienen prevista, como sanción, la cancelación de la licencia de conducción, de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 4 y 5 de la segunda parte del artículo 26 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, modificado por el artículo 7 de la Ley 1383 de 2010".

Para conocer más detalle de los argumentos que soportan cada una de las respuestas dadas por el alto tribunal al ministerio los invitamos a consultar el documento adjunto. (Lea: Nuevas disposiciones para el control de peso a vehículos de carga de dos ejes)

Finalmente, vale la pena señalar que a través del concepto la Sala exhortó a las entidades responsables de llevar los registros de las infracciones de tránsito a mantener la información lo más actualizada y completa posible, con el fin de que las autoridades de

tránsito puedan disponer de ella de manera oportuna y así poder aplicar eficazmente la norma de la reincidencia y la posible nueva reincidencia (C. P. Édgar González López).

Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto, 11001030600020200012600(2445), 03/08/2020.

Reflexiones sobre las cargas probatorias dinámicas

JAVIER TAMAYO JARAMILLO

Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y tratadista

El artículo 167 del Código General del Proceso (CGP) reguló la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Las ideas que siguen buscan perfilar la finalidad y los requisitos para la aplicación de dicha doctrina.

Siguiendo otras legislaciones, como la argentina y la española, el CGP tuvo el cuidado de establecer como principio general la premisa de que el que alega un hecho debe probarlo (onus probandi). Esto tiene su razón de ser en que el derecho sustantivo impone soberanamente la carga de la prueba de determinados hechos a una de las partes. Así, por ejemplo, desde hace casi un siglo, la ley, la jurisprudencia y la doctrina tienen establecido, como principio general, que la culpa médica y el nexo de causalidad deben ser probados por el demandante.

Sin embargo, a veces, el juez cree que, de un lado, al paciente le queda muy difícil probar la culpa y, en cambio, al médico le queda fácil probar la diligencia y el cuidado. En tales circunstancias, el juez, según las particularidades del caso, le puede imponer al demandado la carga de probar que actuó diligentemente. Pero esa carga solo se

# Defensa judicial



puede imponer al demandado, si este en realidad, para ese caso concreto, tiene facilidad de cumplir la carga probatoria que se le impone. Este es elemento esencial para imponer una carga probatoria. Por falta de espacio me queda imposible explayarme sobre esta premisa. Solo daré una pincelada.

En efecto, hasta antes de fallar, el juez puede imponer la presunción de culpa contra el médico y, luego de notificarlo, este puede interponer un recurso contra esa providencia. Si no se notifica la imposición de la carga, se viola el derecho de defensa del demandado.

Pero, a menudo, se presenta un problema que el legislador colombiano no resuelve en forma expresa. En efecto, supongamos que el médico, pese a sus conocimientos de medicina y de haber practicado el cuidado de salud que produjo el daño, no fue capaz de probar ausencia de culpa, aunque, con lealtad, hasta el final, hizo lo posible por lograrlo. ¿Cómo procede el juez al momento de fallar, si el artículo 167 exige como requisito indispensable para imponer la presunción que el demandado tenga facilidad de probar ausencia de culpa? Si el demandado probó que no tenía esa facilidad, ¿qué pasa con la presunción?

Alguien podría alegar que el artículo 167 del CGP considera que esa facilidad siempre la tienen los médicos, ya que ellos practican el acto médico dañino y saben de medicina. Luego, ya, de antemano, la ley presume, en forma irrefragable, la culpa del médico, pues este practicó el cuidado de salud que causó el daño y sabe de medicina. Sin embargo, si esa fuera la solución, ello significaría que el onus probandi quedaría borrado de un plumazo, pues la presunción de inocencia del Código Civil queda revocada por esa presunción inexorable generada por el hecho de que el médico realizó el acto dañino y sabe de medicina. Mejor dicho,

las obligaciones de medio desaparecerían de nuestro derecho sustantivo, pues siempre se presumirían la culpa y el nexo causal.

Considero que la solución es la siguiente: el artículo 167 presume que el médico tiene facilidad de probar ausencia de culpa, ya que él realizó el acto médico y sabe de medicina. Y como se presume que tiene esa facilidad probatoria, también se presume que fue culpable. Una presunción descansa sobre la otra. Ahora, cuando el médico prueba que, pese a saber de medicina, no tiene facilidad de probar ausencia de culpa en el caso concreto, la presunción de facilidad probatoria se derrumba. Y, como por arte de magia, cuando el médico prueba que, para ese caso, no tiene facilidad probatoria, la presunción de culpa también se desvanece. En consecuencia, el onus probandi recupera su imperio y el médico deberá ser absuelto, dado que su culpa no fue probada, y la presunción del artículo 1604 del Código Civil no se aplica, pese a que la Corte Suprema de Justicia considera lo contrario. En otra oportunidad explicaré mi posición.

El problema en tales circunstancias es el mecanismo para desmontar la presunción de culpa impuesta antes de la sentencia. No tengo espacio para discutir el punto, pero creo que el juez, convencido de la incapacidad probatoria del médico, debe revocar la presunción de culpa y, en su lugar, absolverlo.

Jorge Peyrano, padre de la teoría, así lo expresa: “Puede suceder que quien prima facie está en mejor condición de probar no se encuentre en realidad en tal situación privilegiada (...). Al respecto, acertadamente, se ha expresado: ‘Ahora bien, si analizamos la cuestión desde la perspectiva del accionado, aquel desplazamiento

# Defensa judicial



del onus probandi será aceptable, solo si, respecto de tales hechos, el demandado se encontrara, a su vez, en reales posibilidades de acreditarlos, pues en caso contrario, cuando las dificultades probatorias afecten tanto al actor cuanto al demandado, la inversión de la carga procesal respectiva no halla justificativo alguna atento a que constituiría también, un quebrantamiento a los multinombrados principios fundantes de la distribución del esfuerzo probatorio pero en esta oportunidad, contra la factibilidad de éxito de la demandada (...). Así las cosas, se avizora que no puede reclamarse al proceso civil una fijación a priori infalible acerca de los roles y tareas de las partes”[1].

[1] Peyrano J., La doctrina de las cargas probatorias dinámicas y la máquina de impedir en materia jurídica, en la obra Cargas probatorias dinámicas, ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2004, pág. 96.

Fuente: Legismovil – Boletín Oficial  
Artículo 20

Elaboró: Carlos Alberto Aponte García- Contratista

Revisó: Dra. Martha Lucia Triana López - Asesor

Aprobó: Dr. Hugo Alejandro Jiménez Balcázar – Subdirector de  
Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico